**FICHA DE SEGUIMIENTO DEL INFORME Nº 51/16**

**CASO 11.564**

**GILBERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ – “LA GRANDEZA”**

**(México)**

1. **Resumen del caso**

|  |
| --- |
| **Víctima (s):** Gilberto Jiménez Hernández**Peticionario (s):** Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBLC)**Estado:** México**Informe de Fondo Nº:** [51/16](http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/MXPU11564ES.pdf), publicado el 30 de noviembre de 2016**Informe de Admisibilidad:** Analizado junto con el Informe de Fondo Nº 51/16**Temas:** Derecho a la Vida / Garantías Judiciales / Protección Judicial / Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales o Arbitrarias / Investigación y Debida Diligencia / Igualdad y No Discriminación / Derecho a la Integridad Personal. **Hechos:** El 20 de febrero de 1995, oficiales del Ejército mexicano ejecutaron extrajudicialmente a la presunta víctima, mientras huía de militares junto con su familia y otros comunitarios del ejido La Grandeza en el Municipio de Altamirano, Estado de Chiapas, México. Los hechos denunciados fueron investigados en el fuero ordinario, federal y estatal, así como en el fuero militar; no obstante, permanecen en impunidad.**Derechos violados:** La CIDH concluye que el Estado mexicano es responsable por la violación del derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, establecidos en los artículos 4.1 y 24 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Gilberto Jiménez Hernández; por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández; por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández. |

1. **Recomendaciones**

|  |  |
| --- | --- |
| **Recomendaciones** | **Estado de cumplimiento en el 2022** |
| 1. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como moral. En cumplimiento de esta reparación, el Estado deberá tomar en especial consideración tanto el daño a la familia del señor Jiménez Hernández como los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 1994.  | Pendiente de cumplimiento |
| 2. Realizar una investigación de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe. En el marco de esta investigación se deberá esclarecer el contexto en que tuvieron lugar los hechos del caso.  | Pendiente de cumplimiento |
| 3. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso. | Pendiente de cumplimiento |
| 4. Adoptar medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado sea compatible con los estándares descritos en el presente informe. | Cumplimiento parcial |

1. **Actividad Procesal**
2. El 24 de agosto de 2022, la CIDH solicitó al Estado información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Fondo Nº 51/16 el El Estado presentó esta información el 7 de noviembre de 2022.
3. La CIDH solicitó a los peticionarios información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Fondo Nº 51/16 el 24 de agosto de 2022 y los peticionarios presentaron esta información el 27 de noviembre de 2022.
4. **Análisis relativo a la información proporcionada**
5. La Comisión considera que la información proporcionada por ambas partes en 2022 es relevante, actualizada y amplia sobre medidas adoptadas respecto al cumplimiento de al menos una de las recomendaciones emitidas en el Informe de Fondo Nº 51/16.
6. **Análisis del cumplimiento de las recomendaciones[[1]](#footnote-1)**
7. **En relación con la primera recomendación,** en 2021, el Estado informó que convocó a diversas reuniones para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo No. 51/16 sin que los representantes acudieran a las reuniones ni proporcionaran una respuesta al respecto, por lo que no ha sido posible llegar a acuerdos con las víctimas y sus representantes respecto de la propuesta de reparación integral que fue inicialmente presentada. En 2022 el Estado no remitió información relacionada con el cumplimiento de la primera recomendación.
8. En 2020 los peticionarios manifestaron que, con posterioridad a la reunión de trabajo celebrada en el marco del 174 Periodo de Sesiones de la CIDH, las partes acordaron sostener reuniones con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en razón de este caso. Respecto al tema de la investigación, las partes acordaron celebrar una reunión con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación a fin de identificar una ruta que permita incorporar en la investigación el análisis del contexto en el que ocurrió la ejecución del señor Jiménez Hernández; de los impactos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94, así como para reponer el expediente del caso que se encuentra desaparecido.
9. En 2022, los peticionarios refirieron que, el Estado mexicano no ha concretado su manifestación de voluntad para avanzar en el cumplimiento del Informe de Fondo, relacionado con los acuerdos respecto a la ruta del contexto en que ocurrió la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández y los impactos comunitarios.
10. La Comisión observa con preocupación que pese a los esfuerzos de la elaboración de una propuesta de reparación integral y la disposición manifestada para el establecimiento de mecanismos para conocer el contexto de la ejecución del señor Jiménez Hernández, ninguno de estos se ha concretado, por lo que la Comisión hace un llamado al Estado a continuar con la implementación y cumplimiento de los acuerdos en aras de un efectivo cumplimiento de la recomendación. Por lo anterior, la CIDH considera que la Recomendación 1 continúa pendiente de cumplimiento.
11. **En relación con la segunda recomendación,** en 2020, el Estado informó que, derivado de los compromisos asumidos durante la reunión celebrada en el marco del 174 Periodo de Sesiones de la CIDH, en octubre de 2019 el Estado sostuvo una reunión con los peticionarios en donde se les informó que, derivado de la búsqueda realizada en los expedientes a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, no se encontró información relativa al caso del señor Jiménez Hernández. Asimismo, el Estado hizo mención de que los peticionarios compartieron información con la Fiscalía y la Unidad de Derechos Humanos de SEGOB, misma que será incorporada como parte de la investigación ministerial y que servirá de base para trazar líneas de investigación. El Estado hizo mención de que durante el último año se dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de ejercicio ilícito del servicio público que tiene por objetivo recabar información sobre la localización de la averiguación previa 66/1/95. El Estado informó que, con base en dicha investigación, se realizaron diversas diligencias consistentes en el requerimiento de información a diversas instituciones y dependencias de la administración pública local y federal. En 2021, el Estado informó que el 9 de octubre del 2020, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (UDDH) remitió a la representación un oficio que contiene las diligencias realizadas en la investigación. Asimismo, en la comunicación se solicitó́ una fecha para llevar a cabo una reunión de trabajo con la representación en seguimiento al presente asunto, sin obtener respuesta.
12. En 2022 el Estado reiteró la información respecto a que la Fiscalía Especializada de Control Regional no ha recibido medios de prueba por parte de las víctimas, ni por su asesor, desde el inicio de la investigación. Además informó que, dentro de la carpeta de investigación del caso, la cual se originó́ por el extravió de la averiguación previa 66/1/95, relacionada con el presente asunto, se realizaron diversas diligencias para la localización del expediente sin tener resultados positivos.
13. En 2020, los peticionarios señalaron que, respecto a la posible localización del expediente que contiene la averiguación previa /1/95, el 4 de octubre de 2020 se reunieron con autoridades del Estado para entregar una serie de documentos internos vinculados con este caso, así como una memoria externa con dos anexos que forman parte de la petición individual correspondiente a este caso. Los peticionarios señalaron que, en el marco de dicha reunión, la representación del Estado se comprometió a realizar un análisis técnico jurídico de la información proporcionada para avanzar en el desarrollo de líneas de investigación. A la fecha, los peticionarios señalan no contar con información derivada de dicho análisis. De igual forma, los peticionarios hicieron saber a la Comisión que el 21 de enero de 2020, ambas partes celebraron una reunión en la que el Estado reivindicó el derecho de acceso a la justicia del señor Hernández sobre la base de una investigación que tome en cuenta el contexto en la región al momento de los hechos, así como todos los medios de prueba disponibles para identificar a los autores materiales e intelectuales de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández. Como compromiso de dicha reunión se fijó la celebración de un encuentro de seguimiento para el mes de marzo de 2020, misma que tuvo que ser cancelada por la situación vinculada con el COVID-19. Los representantes expresaron su confianza en que las próximas reuniones que se sostengan con el Estado permitan avanzar en la generación de estrategias para dilucidar la manera en que fue aplicada la política derivada del Plan de Campaña Chiapas 94, así como para contar con un plan de investigación estructurado y calendarizado para avanzar en la ejecución de las diligencias que resulten necesarias. En 2021, los peticionarios informaron que el estado de cumplimiento de las recomendaciones en el campo de investigación está pendiente, debido a que la Fiscalía General de la República únicamente se ha encargado de enviar oficios a diversas instituciones del gobierno federal sin ningún resultado.
14. En 2022, los peticionarios refirieron que no ha existido ningún acercamiento por el Estado en lo que va de 2022, no obstante manifestaron estar en la total disponibilidad de abonar a las investigaciones y contribuir a establecer o complementar las líneas de investigación identificadas en el presente caso.
15. La CIDH toma nota de la información proporcionada por el Estado y por los peticionarios y reitera su solicitud para proporcionar información actualizada de las diligencias y estado actual de la investigación. La CIDH recuerda al Estado que el deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad[[2]](#footnote-2). Si bien la Comisión reconoce que el Estado haya expresado interés y voluntad en diseñar un plan de investigación por los hechos de este caso, también le exhorta a que dicho plan incluya un análisis específico del contexto en que ocurrieron dichas violaciones, así como un cronograma con las diligencias más relevantes e idóneas para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares. Asimismo, la CIDH exhorta al Estado a que dicho plan continúe siendo diseñado sobre la base de una relación de caracterizada por la cooperación y participación de los representantes. En razón de lo anterior, la Comisión considera que la segunda recomendación aún se encuentra pendiente de cumplimiento.
16. **En relación con la tercera recomendación,** en 2020, el Estado reportó el cumplimiento de esta recomendación de manera conjunta con acciones desarrolladas para dar cumplimiento a la segunda medida. En especial, indicó que durante el último año se dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de ejercicio ilícito del servicio público que tiene por objetivo recabar información sobre la localización de la averiguación previa 66/1/95. El Estado informó que, con base en dicha investigación, se realizaron diversas diligencias consistentes en el requerimiento de información a diversas instituciones y dependencias de la administración pública local y federal.
17. En 2022, el Estado indicó que, una vez que se tengan identificados los nombres de los servidores públicos que no realizaron una adecuada investigación, inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, se dará vista a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, a fin de que conforme a sus facultades proceda a las sanciones, conforme a derecho corresponda.
18. En 2018, los peticionarios señalaron que el Estado mexicano no habría dado a conocer a los peticionarios ningún tipo de medidas para conocer cuáles serán las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso. En 2019, los peticionarios reportaron que, aunque el Estado informó sobre la iniciación del expediente de investigación DGAI/473/GHIS/2018, a un año de su registro, no hay resultados sustanciales. En 2020, los peticionarios no presentaron información sobre el cumplimiento de esta recomendación. En 2022, los peticionarios no proporcionaron información respecto a esta recomendación.
19. La Comisión observa con preocupación que el Estado continúe sin identificar a las personas servidoras públicas responsables y que no se haya informado a los peticionarios de las medidas correspondientes a implementar en este contexto. Si bien, la CIDH valora positivamente que el Estado haya informado sobre la integración del expediente de investigación en relación con la probable comisión de irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos por la inadecuada integración de la averiguación previa de los hechos, se extraña que en 2022 refiera que no se ha dado vista a la Fiscalía competente. En razón de lo anterior, la Comisión considera que la tercera recomendación está pendiente de cumplimiento.
20. **En relación con la cuarta recomendación,** en 2019, el Estado manifestó que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, en la cual se establece que la jurisdicción militar no será competente para conocer de asuntos relacionados con violaciones a derechos humanos imputados a personal militar en agravio de civiles. Señaló que, a partir de esa fecha, los Tribunales Militares han dejado de conocer de dichos asuntos. En 2020, el Estado no presentó información sobre el cumplimiento de esta recomendación. En 2021, el Estado informó que la Fiscalía General de la República ha capacitado a su personal en temas del uso racional de la fuerza conforme al Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza y a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, en cumplimiento al acuerdo A/080/12, del 23 de abril de 2012. Asimismo, informó sobre diversas capacitaciones a los agentes de la Policía Federal Ministerial.
21. En 2019, los peticionarios manifestaron que esta recomendación no ha sido cumplida, y solicitaron que el Estado garantice medidas de no repetición tales como el desarme y desarticulación de grupos paramilitares, la desmilitarización del territorio indígena de Chiapas, la inclusión de los delitos de lesa humanidad en el marco del derecho positivo mexicano y la desaparición del fuero militar. Asimismo, agregaron que el Estado no ha garantizado, mediante acciones concretas, que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado no siga dañando a la población. En 2020, 2021 y 2022, los peticionarios no presentaron información sobre el cumplimiento de esta recomendación.
22. Ante la ausencia de información actualizada sobre el nivel de cumplimiento de esta Recomendación, la CIDH reitera el análisis del cumplimiento y las conclusiones realizadas en su Informe Anual 2021. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión invita a las partes a continuar con un diálogo para dar cumplimiento a las Recomendaciones del Informe de Fondo No. 51/16.
23. La Comisión toma nota de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, realizada con anterioridad a la publicación del Informe de Fondo No. 51/16. No obstante, la CIDH invita al Estado a informar sobre las medidas adoptadas para la no repetición y, particularmente, insta al Estado a remitir información actualizada sobre el tiempo, modo y lugar de la implementación de las capacitaciones a las que hace referencia, así como de las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado sea compatible con los estándares descritos en el presente informe. Por lo anterior, la CIDH considera que la cuarta recomendación se encuentra parcialmente cumplida.
24. **Nivel del cumplimiento del caso**
25. Por lo anterior, la Comisión concluye que el cumplimiento del caso es parcial. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando las Recomendaciones 1, 2, 3 y 4. En este sentido, la Comisión insta al Estado a adoptar las acciones necesarias para cumplir con las recomendaciones emitidas en el Informe de Fondo Nº 51/16, y a proporcionar información actualizada y detallada sobre dichas acciones a la CIDH.
26. **Resultados individuales y estructurales del caso**
27. No hay resultados individuales o estructurales informados por las partes.
1. La información detallada de los avances en el cumplimiento de las recomendaciones en los años anteriores se encuentra disponible en el [Informe Anual 2021.](https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2021/capitulos/IA2021cap2-es.pdf) [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, Párrafo 62. [↑](#footnote-ref-2)